

# El genocidio indígena del Gobierno mexicano tiene signo de pesos... Chiapas y el PRI

Sanjuana MARTINEZ

Desde el primero de enero de 1994, fecha en que se dio a conocer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la violencia en Chiapas ha ido en ascenso: secuestros de pueblos enteros, crímenes de toda índole, masacres, ejecuciones sumarias, asesinatos extrajudiciales y una guerra civil que recuerda los peores tiempos que vivió Centroamérica.

Chiapas, estado rico en recursos naturales, está considerado "el mayor tanque petrolero", el "refrigerador reserva" de alimentos del país y el "gran abastecedor" de energía por sus presas hidroeléctricas, pero el Estado sureño mexicano, es también el número uno en despojos, represión, presos políticos, abusos de los derechos humanos, asesinatos e impunidad.

Siempre había sido un feudo priísta, hasta que llegaron los zapatistas. El Partido Revolucionario Institucional con casi setenta años en el poder, estableció a través de grupos caciquiles, su dominio y con el apoyo de los "escuadrones de la muerte" su terror.

La guerra zapatista que duró 12 días dejó un saldo de 152 muertos. Y desde entonces, en las zonas norte y Altos de Chiapas se han registrado oficialmente más de 800 asesinatos.

Sin embargo, las cifras que manejan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajan en la zona, son mayores. Tan sólo durante, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro, que asumió el poder el 14 de febrero de 1995, más de 1.500 indígenas chiapanecos han sido asesinados, lo que se traduce en un promedio de por lo menos 15 víctimas a la semana.

Este saldo, está inscrito en una "guerra de baja intensidad". Una de las guerras más crueles, porque es lenta, paulatina y poco conocida en su real dimensión. La militarización de Chiapas y la actividad de ocho grupos paramilitares "patrocinados", "alentados", "protegidos" o "exculpados" por el PRI es una de las realidades internas de México.

Los "escuadrones de la muerte" llamados eufemísticamente "guardias blancas" con la complacencia del gobierno local y federal y principalmente del ejército mexicano que controla la zona, llevan a cabo un exterminio de los pueblos indígenas que luchan ancestralmente por el reconocimiento constitucional de sus derechos.

Los grupos paramilitares surgieron y se multiplicaron en Chiapas a raíz del anuncio del subcomandante Marcos a principios de 1995, de que el EZLN controlaba por lo menos 19 municipios de la entidad.

Empezaron a organizarse principalmente en los lugares donde el PRI perdió las elecciones locales. Aparecieron en Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá. Luego crearon otros grupos en los municipios de Los Altos y en Pentelhó.

Además de la represión y la institucionalización del terror y la violencia, estos grupos tienen como finalidad defender el territorio político perdido electoralmente por el PRI, según denunció el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", que los denomina "escuadrones de la muerte" como los que operaron en Centroamérica.

Los grupos paramilitares hasta ahora descubiertos son: "Paz y Justicia", "Alianza Fray Bartolomé de los Llanos", "Los Chinchulines", "Movimiento Insurgente Revolucionario Antizapatista (MIRA)", "Máscara Roja", "Los Degolladores", "Fuerzas Armadas del Pueblo" y "Tomas Munzer".

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), creada a comienzo de 1995 para coadyuvar a la paz en Chiapas, tiene documentos donde se narran la actividad de los paramilitares. El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gilberto López Rivas, miembro de la comisión ha denunciado la impunidad con la que trabajan los "escuadrones de la muerte" que hacen lo que los soldados y policías no pueden hacer.

La absoluta complementariedad entre la presencia del ejército mexicano a través de patrullajes, instalación de más retenes y, en general toda una estrategia militar y la acción de la policía local y los paramilitares, con la complacencia o apoyo, del PRI-Gobierno, ha sido denunciada en múltiples ocasiones por diversas personas y organismos.

Tres días antes de Navidad, 46 indios tzotziles, principalmente mujeres y niños fueron asesinados mientras rezaban en Acteal, Chenalhó. Las crónicas de la masacre que dieron la vuelta al mundo, hablan de hechos dantescos: mujeres embarazadas con el vientre abierto, niños mutilados a machetazos y hombres muertos por las balas expansivas que por la espalda les fueron disparadas por miembros del grupo paramilitar "Máscara Roja" ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), según denunció el subcomandante Marcos.

¿Por qué estaban allí los indios tzotziles? Fueron desplazados por los priístas de sus pueblos natales. Un total de 325 tzotziles poblaron Acteal, en la cañada, en el lugar que eligió y premeditó el PRI.

La matanza de Acteal forma parte de una estrategia contrainsurgente precisa, diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de la Defensa Nacional para ser aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez con el objetivo clave de: "romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley".

El documento secreto "Plan de Campaña en Chiapas 94" fue dado a conocer por la revista *Proceso* y señalaba que los servicios de inteligencia militar debían: "organizar secretamente a ciertos

sectores de la población civil: entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentimiento patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones”.

Esto confirma la acción de los grupos paramilitares, denunciado insistentemente por el subcomandante Marcos, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos y negado reiteradamente por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

La estrategia del ejército mexicano incluye el desplazamiento de las bases civiles que apoyan a los zapatistas, un drama que actualmente viven casi 6.000 indígenas.

Los atropellos, atrocidades y asesinatos de los paramilitares han sido denunciados reiteradamente. Existen además informes rigurosos al respecto como el de Andrés Aubry y Angélica Inda, investigadores del Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya (Inaremac), que explican que el antecedente de los paramilitares son los pistoleros o guardias blancas, con la diferencia de que los pistoleros no son agentes externos a las comunidades y actúan relacionados con las fuerzas del orden e intervienen con armas de estas policías.

¿Quiénes son los paramilitares? es el título de su estudio que concluye con una verdad indiscutible: “estos criminales son producto del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales”.

La preparación de índole fascista que reciben estos grupos paramilitares es muy parecida a la de los kaibiles de Guatemala, auténticos “rambos” con visibles muestras de consumo de drogas.

Un informe del Centro “Fray Bartolomé de las Casas” titulado “El camino de la masacre” adelantaba de la tragedia que podía pasar en Acteal. Fue entregado 21 días antes del suceso a la Coordinación General de los Altos y Selva de Chiapas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El estudio se remontaba a mayo de 1997, cuando se recrudeció una escalada de violencia soslayada por las autoridades priistas estatales y un grupo armado asesinó a cuatro personas, secuestró a una más y dañó casas en los ejidos de Los Chorros, Polhó, Majomut y Acteal.

A consecuencia de lo anterior, más de 1.000 indígenas abandonaron sus comunidades por el temor de ser agredidos nuevamente. A partir de esa fecha los enfrentamientos se hicieron más frecuentes.

Esta organización no gubernamental de derechos humanos, denunció después de la matanza de Acteal en un estudio titulado “Ni paz ni justicia” que la “versión mexicana” de la guerra de baja intensidad que se desarrolla en Chiapas es una estrategia global de contrainsurgencia que abarca aspectos económicos, psicológicos y que comprende tres frentes: el castrense, el civil y el de la opinión pública.

Según este estudio, la estrategia de los paramilitares mexicanos tiene su precedente en el conflicto entre Estados Unidos y Vietnam, sistema que fue utilizado “exitosamente” en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, así como en Angola y Etiopía.

El genocidio en Chiapas fue denunciado antes de que llegaran los zapatistas. El 29 de noviembre de 1976, el doctor Rodolfo Stavenhagen, actual presidente de la Comisión de Seguimiento y Verificaciones para los Acuerdos de Paz de San Andrés Larráinzar, que tampoco funcionaron por el incumplimiento del gobierno a lo pactado, denunció el genocidio que desde entonces sufría Chiapas.

En un documento presentado en ese entonces, Stavenhagen decía: “elementos del ejército desalojaron violentamente a centenares de familias indígenas; incendiaron y destruyeron casi 300 chozas; pillaron y robaron las pocas pertenencias de los indios; destruyeron una escuela con su material escolar; amenazaron y vejaron a mujeres y niños; golpearon a quienes oponían resistencia; secuestraron a varios campesinos, y dejaron abandonadas a su suerte, totalmente desamparadas y a la intemperie, a las víctimas”.

La realidad en la que hizo su aparición el EZLN en enero de 1994, está precedida por cientos de casos de violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros y asesinatos de indígenas.

La matanza de Acteal no ha sido la única que ha estremecido las entrañas de los mexicanos: el 15 de junio de 1980 el gobernador priista Juan Sabines Gutiérrez había ordenado el desalojo violento de por lo menos 1.000 indígenas, que en el poblado de Wolonchán tenían invadidos unos ranchos propiedad del cacique Gustavo Flores.

La cantidad de muertos, no conoció cifra oficial, pero el pueblo casi desapareció. Como ahora, desde entonces el PRI es acusado por los indígenas de querer acabar con ellos, de ser “cómplice” de los terratenientes que les explotan con salarios inferiores a los 15 pesos diarios (225 pesetas), jornadas mayores a las 16 horas, cárceles clandestinas y con deudas que los obligan a trabajar de por vida para poder pagar.

Al año siguiente de la matanza de Wolonchán, concretamente el 5 de marzo de 1981 se registró un desalojo más en el ejido “15 de septiembre”, municipio de Ciudad Hidalgo, en el que 10 campesinos resultaron muertos, 35 heridos y tres desaparecidos.

Ese día, alrededor de las 16:00 horas, las fuerzas represivas llegaron acompañadas por los latifundistas Mario Gaxiola e Hilario, entre otros, actuando por petición expresa de la promotoría de la Reforma Agraria.

En Chiapas, la barbarie existente se refleja en la actualidad en prácticas tan primitivas como lo que les sucede a los indígenas que se rebelan contra sus patrones y deciden no trabajar. A ellos por exigir sus derechos se les castiga colgándolos de los dedos pulgares hasta que mueren, de acuerdo a las denuncias recibidas.

Por lo tanto, temerosos de la represión, los indígenas huyen desde hace años a las ciudades chiapanecas para engrosar los cinturones de miseria. Allí se encuentran con el “dominio ladino”, es decir, los mestizos mexicanos que se sienten superiores al indígena y lo explotan cobrándole “impuestos fantasmas” por estar en la plaza del pueblo y ven-

der sus artesanías. La otra opción que tienen es someterse a los caciques como peones, sirvientes, o prácticamente vivir de la limosna.

Ante esta situación, en agosto de 1985, el gobierno en Chiapas, del general priísta Absalón Castellanos Domínguez fue enjuiciado por un tribunal campesino que, con base en testimonios y denuncias, le declaró responsable de encabezar una política etnocida contra más de 800.000 indígenas chiapanecos.

En ese entonces, escritores, investigadores, políticos de la oposición, miembros del magisterio y organizaciones obrero-campesinas, constituidos como "gran jurado", resolvieron exigir justicia y castigo a los responsables de tanto número de violaciones de derechos humanos.

La respuesta del gobierno mexicano fue tajante, según la denuncia de Amnistía Internacional un año después: siete campesinos fueron asesinados por elementos de Seguridad Pública (policía local), otros cinco quedaron detenidos y en dos años más de 300 indígenas habían desaparecido.

El mandato del general Castellanos Domínguez fue calificado como el más represivo de la República y los indígenas en plena campaña presidencial del candidato del PRI, recibieron a Carlos Salinas de Gortari con el siguiente mensaje: "Conozca Chiapas y disfrute de su represión".

La dramática situación que se vivía entonces, fue recogida en "Cronología de un etnocidio reciente" que elaboró la Academia Mexicana de Derechos Humanos en donde narra más de 500 hechos sangrientos ocurridos en el sexenio del general Castellanos y el asesinato de más de un centenar de inconformes con el gobierno. También incluía datos sobre las cárceles chiapanecas que están llenas de indígenas, líderes campesinos y magisteriales, acusados de falsos delitos o simplemente encarcelados sin las mínimas garantías judiciales.

Este gobierno priísta fue rebasado en número de delitos por el siguiente, el del gobernador Patrocinio González Garrido, primo político del presidente Salinas de Gortari. El nuevo gobernador ordenó el 12 de julio de 1991 que 340 personas entre hombres, mujeres y niños que marchaban desde la Selva Lacandona hasta la capital del país para protestar por un saqueo, fueran reprimidas y encarceladas.

Un año después, los indígenas realizaron una nueva "marcha Xi Nich" por la paz y los derechos humanos para denunciar las arbitrariedades del gobierno de Patrocinio González: "conmemoramos los 500 años de la conquista con detenciones masivas; torturas, despojos, discriminación racial, social y política, asesinatos, aprehensiones ilegales y reformas a la legislación estatal con las que se anulan garantías constitucionales de asociación y de reunión", decía su documento.

La historia de Chiapas está llena de excesos. El caso del ejido Morelia es uno de los más escandalosos. Cientos de soldados del 78 Batallón de Infantería tomaron el poblado el 7 de enero de 1994 y detuvieron a más de 30 indígenas. De acuerdo con Amnistía Internacional y Human Rights Watch-

Américas, existen "al menos 22 asesinatos extrajudiciales cometidos por los militares" que no han sido esclarecidos y menos castigados.

El sistema feudal que impera en la zona y que se remonta al período anterior a la Revolución mexicana, emplea métodos que dejarían frío a cualquiera. Como muestra, un botón: en mayo de 1995, miembros de la Unión Campesina Popular Francisco Villa fueron desalojados de las fincas "Liquidámbar" "Prusia", "Las Chicharras" y "Sayula" ubicadas en la Sierra Madre de Chiapas propiedad de caciques alemanes y de la familia Orantes Balbuena, ligada según los villistas, al PRI y al narcotráfico.

Los campesinos se habían apoderado de estas villas llevados por la desesperación, porque miles de ellos eran obligados a trabajar jornadas de más de 12 horas, se les pagaba con moneda sin valor o alcohol y tenían que adquirir productos en la tienda del matrimonio Hudler Schimpf, dueño de las fincas.

Los alemanes mantenían a los indígenas hacina-dos en cobertizos. Únicamente les daban de comer frijoles y tortillas y se les castigaba en prisiones construidas en las mismas fincas.

Estos son sólo algunos ejemplos, de los cientos que existen para reflejar la actual realidad de Chiapas. Las famosas negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN han fracasado sistemáticamente y no han impedido que la violencia aumente; al contrario, cada fase del diálogo suspendido desde hace más de año y medio fue precedida de algún acto de represión.

La falta de voluntad política del gobierno mexicano para llegar a un auténtico acuerdo impide el avance hacia el camino de la paz. Su discurso externo es conciliador, pero el interno es represivo.

El instrumento para llegar a la anhelada paz son los acuerdos de San Andrés, pero prácticamente la totalidad de éstos, han sido incumplidos por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que insiste en señalar como "asuntos internos" las violaciones de derechos humanos en Chiapas y ha instituido una política de acoso y deportación contra los extranjeros miembros de organismos humanitarios.

Al PRI se le fue de las manos el Estado de Chiapas y el gobierno ya no controla la situación. Por un lado ha perdido la línea de diálogo con los insurgentes y por otro, la dirección política de las demás fuerzas en conflicto: el ejército, la oligarquía económica del territorio y los paramilitares.

El partido-gobierno no quiere perder su feudo electoral. Tradicionalmente el PRI engañaba a los indígenas prometiéndoles agua o energía eléctrica a cambio de su voto. En un tiempo lo logró, pero ahora el pueblo chiapaneco se ha levantado dignamente para exigir democracia y libertad.

El movimiento de las comunidades indígenas por su autonomía ha logrado consolidarse a partir de la irrupción armada del EZLN. Son ya 38 municipios rebeldes a pesar del cerco militar y de las constantes maniobras de los grupos paramilitares, que pretenden someterlos a sangre y fuego.

En el avance indígena, se ha alcanzado un punto de no retorno. La acción cívica de los indios chiapanecos, su organización, su fuerza y su dramática

situación les lleva acuñar su lema: "luchar y morir combatiendo o morir de hambre".

Ante esto, la pregunta que surge, es la misma que se hacen muchos mexicanos y extranjeros: ¿por qué después de 500 años los indios siguen estando marginados y explotados? El problema fundamental es que no se les reconoce como parte integral de la nación.

El historiador Enrique Florescano en su libro

"Etnia, Estado y nación" dice una vergonzosa verdad que lo explica: "la contradicción mayúscula que implica el hecho de que en los libros de historia patria se diga que 'las etnias fueron las creadoras de la civilización mesoamericana, una de las más altas de la antigüedad' y afuera de la escuela los indígenas sean considerados seres inferiores y no representativos del verdadero México".